



Bogotá D.C., veintinueve (29) de marzo dos mil veintitrés (2023)

EXPEDIENTE: 2018-00507

ASUNTO

Se resuelve recurso de reposición, y en subsidio apelación, interpuesto por la parte demandante contra el auto de 16 de agosto de 2022, por medio del cual se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

ARGUMENTOS DEL RECURSO

En lo medular lo sustenta argumentando que:

- i) No existe para este caso ninguna actuación pendiente a cargo de la actora, permaneciendo en espera del pago por parte de la ejecutada, quien no posee más bienes sobre los cuales puedan recaer eventuales cautelas.
- ii) Que la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, en un caso similar, revocó la decisión de primera instancia donde se decretó la terminación por desistimiento tácito.
- iii) Que la forma en que se decretó el desistimiento tácito deviene en un exceso ritual manifiesto, de suyo trasgresor de garantías constitucionales.
- iv) Que el juzgado no tuvo en cuenta que el 6 de octubre de 2020 se remitió solicitud de impulso procesal, mismo que no fue tenido en cuenta.

CONSIDERACIONES

La norma invocada como sustento jurídico de la decisión impugnada es del siguiente tenor: “[c]uando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes” [subrayas del Juzgado].

De tal suerte que para que el recurso horizontal salga adelante de lo que debe persuadirse al juzgado es de que el supuesto de hecho de la norma trasunta no se compadece con el caso concreto y por ahí derecho es imposible derivar la consecuencia jurídica allí prevista. No podría ser de otra manera.

Entonces, si el argumento medular que plantea la reposición apunta a sostener la tesis que en tanto se estaba a la espera del pago por parte de la ejecutada no existían a cargo de la parte actora actuaciones por desplegar, ello, bien miradas las cosas,



no desemboca en la revocatoria del auto impugnado, pues al margen que la norma no prevea excepciones a las hipótesis normativas contempladas por el legislador, lo cierto es que en cualquier caso allí prevé que el desistimiento tácito opera bajo dos causales distintas, ora porque no se despliega una actuación, ora por que no se solicita al juzgado que realice alguna, como bien podría ser que se solicitara dar aplicación por parte del despacho al numeral 4 del artículo 43 del Código General del Proceso en lo relativo a la identificación y ubicación de bienes del ejecutado o que se solicitara alguna actuación tendiente a proferir decisión de seguir adelante la ejecución; sin embargo revisadas el *dossier* se observa que el demandante hubiese optado por desplegar tampoco este tipo de actuaciones. Si ello es así, acá solo se replica una de los dos supuestos de hecho previstos por el legislador, lo que de suyo implica que por esa razón la decisión deba ser confirmada.

En lo que tiene que ver con el argumento relativo a lo decidido por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dígase que: i) la cita traída como sustento del recurso no permite deducir una *ratio decidendi* que aplique necesariamente al caso concreto bajo la misma situación de hecho que acá se toma como insumo de la decisión judicial recurrida. ii) Que en cualquier caso las decisiones adoptadas por la jurisdicción contencioso administrativa, *prima facie* no constituyen precedente vertical para la jurisdicción civil y mucho menos lo hace si es que la decisión del tribunal no resulta obligatoria para los juzgados ubicados en una sede jurisdiccional distinta a Boyacá.

Relativamente al cuarto argumento que trae el recurso dígase que si es que el juzgado optó por decretar el desistimiento tácito en el mes de agosto de 2022, sobre la base de que para esa fecha había fenecido el término anual de que trata el artículo 317 del C.G.P., entonces es indiferente para ese análisis que en octubre de 2020 se hubiese solicitado al juzgado un informe de títulos, además porque conforme lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: «(...) dado que el “desistimiento tácito” consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la “actuación” que conforme al literal c) de dicho precepto “interrumpe” los términos para se “decrete su terminación anticipada”, es aquella que lo conduzca a “definir la controversia” o a poner en marcha los “procedimientos” necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

En suma, la “actuación” debe ser apta y apropiada y para “impulsar el proceso” hacia su finalidad, por lo que, “[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi” carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo “ponen en marcha” (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)” [Cas Civ. Sent. STC11191-2020]. [subrayas del juzgado]

Entonces, bajo ese panorama jurisprudencial el juzgado entiende que la simple petición de un informe de títulos ni ayuda a definir la controversia ni activa los mecanismos necesarios para la satisfacción de los derechos del acreedor en el marco de un juicio de ejecución.

Y para finalizar y responder el razonamiento relativo a que el juzgado de no revocar el auto combatido estaría incurriendo en un exceso ritual manifiesto y de contera conculcando derechos fundamentales, téngase en cuenta que el respeto al principio de preclusión del procedimiento es también parte integral del debido proceso.



Es que sostener que el Juzgado acá está exigiendo formalidades innecesarias es algo en lo que jamás se puede convenir, pues si se decretó el desistimiento tácito, se hizo exponiendo razones de derecho suficientes, que apelaban no a un criterio subjetivo, sino acudiendo a la herramienta hermenéutica que consulta la voluntad del legislador.

Es que implicar a fuerza la tesis de que el juez basado en caprichos está sacrificando el derecho sustancial en pos del rito procesal cuando se abstuvo, en forma por demás razonada, de proceder a dar aplicación a la norma antes citada, sería tanto como asumir que no existe entonces la institución de la interpretación judicial, que no es otra cosa que la actividad que llevan a cabo los jueces en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que les está encomendada, consistente en determinar el sentido y alcance de las normas jurídicas y otros estándares de relevancia jurídica que deben aplicar al caso concreto que están conociendo y que deben resolver.

Es que si bien puede entenderse que una providencia judicial pueda eventualmente erigirse en una vía de hecho, ahora llamadas causales genéricas de procedibilidad, ello solo tiene lugar cuando se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente la razón de su decisión. Acá, el auto impugnado condensó las razones de derecho que lo llevaron a resolver en la forma en que se hizo.

En virtud de lo anterior, el auto impugnado se mantiene incólume.

Finalmente, respecto a la alzada propuesta en subsidio, el mismo no se concederá, comoquiera que los autos enlistados en el artículo 321 del C.G.P., son apelables siempre y cuando hayan sido proferidos en primera instancia, y que al tratarse el presente asunto de un proceso de mínima cuantía es, obviamente de única instancia. [Inciso 2 del artículo 321 del C.G.P.].

RESUELVE:

PRIMERO. NO REPONER el auto combatido, de fecha 16 de agosto de 2022.

SEGUNDO. NEGAR por improcedente la apelación formulada en subsidio.

NOTIFÍQUESE.

Firmado Por:

Nelson Javier Pena Solano

Juez Municipal

Juzgado Pequeñas Causas

Juzgado 15 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9b224cb47284fe6cbf36f9544e982d9af2d300c081fad0061afb2a58e145e9a9**

Documento generado en 29/03/2023 04:25:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>